



# 3.

---

**La crisis de representación  
de la sociedad colombiana.  
Un intento de análisis  
político del Paro  
Nacional de 2021**



# La crisis de representación de la sociedad colombiana. Un intento de análisis político del Paro Nacional de 2021

Por Fernán E. González\*

DOI: <https://doi.org/10.54118/controver.vi218.1249>

*Resumen:* en el presente artículo se analiza el Paro Nacional realizado entre los meses de abril y junio, desde la perspectiva de la crisis de representación de la sociedad colombiana, contrastando la mirada complotista y homogeneizante de los funcionarios estatales con la realidad multiforme de la movilización social, en la que se mezcló la protesta de sectores institucionalizados con la irrupción en la escena pública de grupos marginal o subordinadamente relacionados con la institucionalidad.

*Palabras clave:* crisis de representación, institucionalización, movilización social multiforme, *apartheid* institucional.

## The Colombian Crisis of Representation. A Provisional Approach to the Political Analysis of Mobilization Between April and June of 2021

**Abstract:** The present article looks for a political analysis of the recent social mobilization, developed between April and June, as a symptom of the Colombian crisis of political and social representation, by contrasting the vision of some government officials based on a sort of conspiracy theory and homogenizing view and the complex and heterogeneous reality of social movements, which combine the protest of institutionalized groups with the irruption of less institutionalized sectors in the public scene.

*Keywords:* Crisis of representation, institutional apartheid, institutionalization, multiform social mobilization.

\* Politólogo de la Universidad de los Andes, historiador de la Universidad de California en Berkeley. Investigador del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP). Correo electrónico: fernangonzalez39@gmail.com

*Cómo citar este artículo:* González, Fernán (2022). La crisis de representación de la sociedad colombiana. Un intento de análisis político del Paro Nacional de 2021. *Revista Controversia*, (218), 87-125.

*Fecha de recepción:* 28 de julio de 2021

*Fecha de aprobación:* 22 de noviembre de 2021

## Introducción

Paradójicamente, la coyuntura del paro de dos meses que el país afrontó entre abril y junio de 2021 terminó por producir un extraño consenso: en Colombia, nadie se siente bien representado por nadie, como ha afirmado reiteradamente Hernando Gómez-Buendía en varios artículos. Los partidos, tradicionales o no, ya no representan a la población colombiana, en contraste con el predominio de los partidos Liberal y Conservador en el siglo XIX y primera mitad del XX, lo que facilitó el fin del periodo conocido como la Violencia, de mediados del siglo pasado, con el pacto del Frente Nacional. Pero tampoco se presenta una aprobación para el presidente Duque, ni para el Congreso y la rama judicial. Y es muy notorio el rechazo generalizado a la policía, especialmente a propósito del manejo represivo de la protesta de esos meses. Tampoco se registra mucha aceptación del liderazgo de los dirigentes sindicales, más allá de sus respectivas organizaciones.

Por otra parte, fue muy dicente la distancia de movimientos sociales como la Guardia Indígena y los grupos estudiantiles frente al Comité Nacional de Paro, quienes explícitamente insistieron en que sus promotores no los representaban. Y muchas organizaciones de carácter gremial como las de los camioneros y campesinos prefirieron dialogar directamente con los funcionarios estatales encargados de los asuntos que les concernían. Tampoco las organizaciones barriales impulsadoras de los bloqueos en algunas localidades se sentían representadas por los negociadores, como afirmaron reiteradamente.

Este consenso generalizado sobre la no representatividad de los negociadores del Paro conduce a una serie de interrogantes, unos coyunturales, como el porqué de la insistencia del gobierno de Duque en la condena de los bloqueos por parte del Comité Nacional de Paro, a sabiendas de que no se habían producido bajo su influencia. E, incluso, la aceptación de conversar con los organizadores del Paro, a pesar de su escasa representatividad. Pero, más allá de esas inquietudes coyunturales, está la pregunta sobre hasta dónde debe y puede la política representar a la sociedad (Lechner, 1992), hasta dónde la democracia se relaciona con la representación (Lefort, 1992), y los problemas sociales y políticos que hacen visibles las movilizaciones sociales de grupos y sectores marginal o subordinadamente relacionados con la vida institucional (Tilly, 2003; Goldstone, 2003).

*“En Colombia, nadie representa a nadie”*

La reiterada afirmación de Hernando Gómez Buendía (2021a y 2021b) sobre la escasa representatividad de los promotores del Paro frente a la realidad multifacética de las protestas de estos dos meses ilustra, a mi modo de ver, el trasfondo de las movilizaciones: una enorme crisis de representatividad política de lo social. Esta movilización rebasó los canales normales de expresión previstos por la institucionalidad política y social, al tiempo que hizo evidente la incapacidad del Estado para responder al descontento de los pobladores.

Pero también evidenció las dificultades de los movimientos sociales realmente existentes para canalizar las tensiones de las poblaciones no vinculadas a sus membresías. Lo que refleja, por otra parte, la distancia entre la lógica de negociación reivindicativa de los promotores del Paro, de carácter gremial o sectorial, y el lenguaje agresivo de la lógica de búsqueda de inclusión de sectores juveniles y barriales, escasa o marginalmente vinculados a la vida institucional. Obviamente, esto explica por qué los promotores del Paro se negaban a descalificar la estrategia de los bloqueos, como exigía el Gobierno central, pero también por qué

algunos mandatarios locales del propio Estado intentaban buscar salidas negociadas con los protestantes, a pesar del rechazo o suspicacia de funcionarios y políticos del orden central, como se hizo evidente en el llamado a interrogatorio del alcalde de Cali por la Fiscalía General de la Nación.

## **Una larga historia de desencuentros**

Esta incapacidad estatal para articular poblaciones organizadas al margen de la institucionalidad se había manifestado en las áreas rurales periféricas en la historia pasada: el nacimiento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) está asociado a la incompreensión estatal frente a las denominadas repúblicas independientes de los años sesenta (Vásquez, Vargas y Restrepo, 2011), mientras que el surgimiento del Ejército de Liberación Nacional (ELN), en regiones como el Arauca, aparece vinculado a su falta de respuesta adecuada frente a las protestas campesinas de esa región (Aponte y González, 2021). Pero el problema no se presenta ahora solo en las regiones rurales de la periferia del país, sino también en las ciudades grandes e intermedias, cuya institucionalidad se ve desafiada por una población de jóvenes urbanos, ubicados en barrios periféricos, que encuentran enormes dificultades para insertarse en la economía formal, el sistema educativo vigente y la vida política realmente existente.

Por otra parte, esta incapacidad del Estado para dialogar con poblaciones organizadas al margen de la institucionalidad se ve agravada por el desdibujamiento de la capacidad de las redes clientelares de los grandes partidos tradicionales que, anteriormente, articulaban de alguna manera a las poblaciones subordinadas con la lógica del Estado nación, por su papel en la tramitación de las demandas de los pobladores frente a la institucionalidad. En ese sentido, se puede recordar el papel que desempeñaban las juntas de acción comunal de los barrios en construcción frente a las administraciones locales, a pesar de que esos poblamientos

marginales habían sido producto de la invasión de terrenos públicos o privados, y su relación con la lógica de las clientelas bipartidistas que las articulaba no solo con las administraciones, sino con las maquinarias de los partidos en el orden nacional.

Esta importancia del papel articulador de los partidos tradicionales en la vida nacional explica su monopolio de la vida política y cultural del país durante el siglo XIX y primera mitad del XX, que se expresó en el éxito del pacto del Frente Nacional para poner fin a la Violencia de mediados del pasado siglo, por la identificación de la mayoría de la población con los jefes nacionales de los partidos tradicionales. Pero ese éxito civilizador de la contienda política no estuvo acompañado de reformas modernizantes y proyectos de desarrollo que respondieran adecuadamente a los nuevos problemas sociales que el país experimentaba en los años sesenta (Gutiérrez, 2007). Por eso, el fracaso de los intentos reformistas y la percepción de cierre del sistema político, que se consideraba monopolizado por los dos partidos tradicionales, condujo a un escenario favorable para el surgimiento y desarrollo de guerrillas insurgentes en las zonas rurales periféricas. Obviamente, este surgimiento evidenciaba también las dificultades del Estado central para hacer presencia eficaz en todo el territorio nacional, especialmente cuando las poblaciones se organizaban al margen de las redes clientelares de los partidos tradicionales para la expresión de su descontento.

Por otra parte, la incapacidad del Estado y del régimen político para responder adecuadamente a los profundos cambios que experimentaba la sociedad colombiana en la segunda mitad del siglo XX, debido a la resistencia de los sectores más tradicionales de ambos partidos frente a los intentos modernizantes de los sectores más progresistas, trajo como consecuencia la percepción generalizada de la política como una realidad cada vez más lejana de la realidad. Esta resistencia hacía que la clase política tradicional fuera percibida como autorreferida, encerrada en sí misma y dedicada casi exclusivamente a su autorreproducción.

Además, estas tensiones entre sectores modernizantes —de estilo tecnocrático— y sectores tradicionales; y también entre los políticos del orden local, regional y nacional, trajeron consigo cierta hibridez de nuestras instituciones, producto de la cual coexisten diferentes lógicas políticas —clientelismo, autoritarismo y ciudadanía moderna, dominio directo e indirecto del Estado—, como he señalado en trabajos anteriores (González, 2016, 2020). Esto, aunque limitaba la presencia de las instituciones estatales en la totalidad del territorio nacional, permitía al Estado central ejercer alguna presencia en regiones y localidades, y obtener legitimidad electoral, en una especie de dominio indirecto ejercido por medio de las instancias locales y regionales de poder (González, 1997). Hoy esta intermediación es cada vez menos necesaria por la mejoría de las comunicaciones con el nivel central, la elección popular de alcaldes y gobernadores, la desaparición de las maquinarias del centro y la descentralización administrativa.

Estos cambios se profundizaron con el incremento de la autonomización de los poderes regionales y locales frente a los poderes centrales tanto de los partidos como del Estado, favorecida por los efectos no planeados de la reforma constitucional de 1991, que se hizo evidente en la derrota de los intentos de “política virtuosa” y reformista de los años setenta y ochenta, como muestra Francisco Gutiérrez (2007). Y, consiguientemente, en el aumento de la desarticulación de los niveles de poder —nación, regiones y localidades—, que empeora cuando los gobernantes regionales y locales pertenecen a grupos políticos distintos a los del poder central, como Bogotá, Medellín y Cali. La combinación de estos factores trajo como consecuencia una tendencia cada vez más generalizada de rechazo hacia la actividad política institucionalizada por las organizaciones políticas del orden nacional, al tiempo que cierta revitalización de la política del ámbito local.



## La insatisfacción creciente frente a la institucionalidad

Esta deslegitimación de la vida política, realmente existente en el orden nacional, se hace evidente en el desprestigio del Congreso y los partidos, incluso de los de izquierda. Y se mencionan particularmente los mecanismos clientelistas para la consecución y el mantenimiento de la adhesión de sus bases sociales, pero esta crítica aparecía un tanto matizada por el reconocimiento de cierta capacidad de estos instrumentos para permitir el acceso de algunos sectores a los servicios y beneficios del Estado, así fuera de manera subordinada y desigual (Miranda, 1976; Ocampo. 2014, 2018).

Esta crisis política manifiesta un problema más de fondo: la profunda desconfianza de buena parte de la población en las salidas institucionales, que se concreta en el notable aumento de insatisfacción con la forma como están funcionando las instituciones estatales, como lo muestra el Observatorio de los Andes: entre 2012 y 2020, se evidencia un creciente rechazo a la clase política y a los mecanismos institucionales de representación política, pues, para 2020, la simpatía por los partidos se había reducido a un 20 %. Esto significa que el 80 % de los entrevistados no se identificaba ya con ningún partido político, que significa una importante ruptura con la historia política anterior, cuando la inmensa mayoría del pueblo colombiano se identificaba con los partidos Liberal y Conservador.

Además, este precario 20 % de identificación partidista se concentra, en un 63 %, en los partidos Colombia Humana, Liberal y Centro Democrático, donde, además, el crecimiento de once puntos porcentuales —del 20 % en 2018 al 31 % en 2020— de los simpatizantes de la Colombia Humana de Gustavo Petro contrasta con la caída del Centro Democrático, que pasó del 28 % al 22 %. (Observatorio Uniandes, 2020). También señalan esos estudios una desfavorabilidad creciente de líderes políticos como Uribe —del 30 % al 20 %—, Duque —del 21 % al 18

%—, Vargas Lleras —del 30 % al 18 %—. Y, en medio de la ola de protesta social, la desfavorabilidad de Duque subió del 49,4 % al 58.7 %, la de Uribe del 60 % al 73 %, la de Petro del 45 % al 48 %, y el 55.6 % no aprueba el manejo del paro por parte de Duque. Según un sondeo de Datexco, el rechazo a Duque ya pasaba del 72 % y subió algunos puntos después del atentado en Cúcuta.

Y esta insatisfacción social se refleja en el profundo deterioro de la confianza en la Policía Nacional, entre 2004 y 2020, especialmente de los Escuadrones Móviles Antidisturbios (ESMAD), matizada por alguna confianza en las fuerzas armadas. Al parecer, la mala imagen de la Policía se debía a la información sobre los escándalos de corrupción y las noticias de excesos en el uso de la fuerza en los últimos años, que se añaden a la percepción de inseguridad generalizada entre buena parte de la ciudadanía (Observatorio Uniandes, 2020).

Estas percepciones de abusos policiales en el manejo de las protestas explican, en parte, la respuesta estatal al protagonismo juvenil que recoge los sentimientos de desesperanza, rabia y crispación de este sector de la población ante el aumento del desempleo y la deserción en colegios y universidades. El estudio del Laboratorio Javeriano de la Juventud y la Fundación SM muestra que la confianza de los jóvenes en los partidos es apenas del 7 %, en el Congreso del 10 %, en el presidente del 12 %, en el sistema judicial del 15 % y en los sindicatos del 18 %; es un poco mejor la confianza en la Policía (26 %), organizaciones de la sociedad civil (28 %), medios de comunicación (30 %), la empresa privada (37 %) y las Fuerzas Armadas (46 %). La única institución que sobrepasa el 50 % es el sistema educativo, que alcanza el 58 % (*El Espectador*, 2021a, pp. 2-3).

Según algunos, la percepción del poco impacto de la educación para la movilidad social y la igualdad de oportunidades hace que muchos sientan que no tienen nada que perder. Por eso, aclaraba Alejandro

Gaviria, por entonces rector de la Universidad de los Andes, que el movimiento no representa “el diseño inteligente de una gran conspiración internacional”, pero evidencia problemas serios de representatividad: nadie puede arrogarse su vocería, pues se trata de grupos distintos con intereses distintos, que hacen difícil la negociación con el Estado (*El Tiempo*, 2021a, p. 1.4).

Pero esos intereses distintos de jóvenes y grupos sociales se vieron unificados por la inoportuna propuesta de reforma tributaria del ministro Carrasquilla, quien bajo el pretexto de la necesidad de financiar el aumento del gasto social por el manejo de la pandemia buscaba equilibrar la disminución de recursos fiscales resultantes de la reforma tributaria de 2019, al tiempo que introducía medidas regresivas como el aumento de la tributación de las clases medias y la ampliación del impuesto al valor agregado (IVA), al lado del mantenimiento de las exenciones al gran capital.

## **La “tormenta perfecta”: el Paro Nacional de abril y mayo**

La propuesta de Carrasquilla, en el contexto generalizado de descontento social, hizo que el paro promovido por sindicatos y grupos estudiantiles se convirtiera en una protesta extendida a ciudades grandes, intermedias y pequeñas, que sobrepasó, por mucho, las bases sociales de sus organizaciones, pues recogía las múltiples expresiones y motivos de descontento social: camioneros independientes enfrentados a sus dirigentes gremiales, campesinos opuestos al bloqueo de las vías, pobladores reacios a los peajes excesivos para el ingreso a sus ciudades, habitantes descontentos de barrios marginales, jóvenes sin trabajo ni acceso a la educación y otros grupos minoritarios.

Todo esto refleja la enorme distancia de buena parte de la población de las ciudades grandes e intermedias frente a las instituciones realmente existentes y el rechazo a la clase política, reforzadas por la crisis eco-

nómica y social de la pandemia que ha hecho evidentes las enormes desigualdades del país en todos los terrenos. Se produjo así un resurgimiento de la protesta social, generalizada pero multiforme, que se había presentado en la segunda mitad del 2019, que no se agotó con logros iniciales como el retiro de la reforma tributaria y las renunciaciones de los ministros de Hacienda y de Relaciones Exteriores, Alberto Carrasquilla y Claudia Blum, respectivamente (Guerrero, 2021).

Entre otras cosas, porque los abusos policiales en el manejo represivo de la protesta social proporcionaron un nuevo motivo de movilización, que se centró ahora en la búsqueda de garantías para mantenerla e incluso ampliarla a otros sectores y regiones, y en la exigencia de la condena presidencial de los abusos policiales, ligada a la no declaración del estado de conmoción interior, y el retiro del Ejército y el ESMAD del control de las protestas. Esto significó el desplazamiento a un segundo plano de otras peticiones como el no retorno a la presencialidad en el sistema educativo, la renta básica mínima, la defensa de la producción nacional, el freno a la erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, la participación en el plan nacional de vacunación y la no discriminación de género.

Además, la inadecuada respuesta estatal evidenciada en abusos y uso desproporcionado de la fuerza, con ocasión de incidentes vandálicos y anárquicos de carácter aislado, profundizaron la distancia de la población frente a la policía, al tiempo que llevaron a una mayor coordinación de la resistencia de los protestantes en algunas zonas de las ciudades. Por eso, la generalización inercial por los logros alcanzados hizo que la movilización se ampliara a ciudades intermedias, ante la confluencia de movimientos regionales y locales que utilizaban la dinámica del Paro Nacional para la gestión de sus propias reivindicaciones. Contra esta generalización, llamaron la atención las advertencias de Petro, quien pedía la suspensión del Paro con una proclamación de victoria parcial, para no despilfarrar el capital político logrado en una extensión de las protestas que consideraba carecían de propósito claro.

Por otra parte, esta ampliación de la cobertura del Paro trajo otra consecuencia importante: la conversión del Comité Nacional de Paro, nada homogéneo internamente, en una sombrilla de unidad simbólica, que intentaba darle alguna expresión institucionalizada al descontento general, al tiempo que lo aprovechaba para gestionar las reivindicaciones concretas de sus afiliados y grupos afines, como estudiantes, empleados oficiales y maestros (Gómez Buendía, 2021a, b y c). Pero, como confesaban algunos de sus dirigentes, el Comité era muy consciente de que la protesta cubría nuevos intereses más allá de su agenda oficial. Todo esto evidenciaba la carencia de un liderazgo claro y de un proyecto político que unificara la multitud de los diversos reclamos en propuestas concretas (Duncan, 2021, pp. 1.15),

Las consecuencias de esta ambigua situación eran obvias: la compleja relación del Paro con la vinculación oportunista de grupos marginales e intereses sectoriales, con motivaciones y estilos de acción diferentes del acostumbrado manejo sindical, traía consigo problemas concretos como la resistencia del Comité Nacional de Paro a condenar la práctica de los bloqueos, que era la exigencia del Gobierno para negociar, pero que contrariaba su insistencia en el respeto a la autonomía de sus organizadores locales; así, el Comité solo podía invitar a suspender los bloqueos y crear corredores humanitarios que moderaran su efecto en la población.

## **La lectura complotista del Paro: la “*revolución molecular disipada*” de Uribe**

La complejidad antes señalada de los problemas subyacentes a la protesta contrasta con el simplismo de algunos comentaristas que la interpretaron a partir de un supuesto complot organizado. Por ejemplo, según María Clara Ospina, la democracia colombiana estaba bajo el ataque de “una agresión bien concertada y planeada hasta el último detalle contra el gobierno legítimo de Iván Duque”, coordinada por “los

comunistas de siempre”, que se tomaron el poder en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Para ella, lo que estaba ocurriendo en Colombia no tenía nada de espontáneo, sino que obedecía a un plan calculado y ejecutado con maestría, semejante a los nueveabrileros de 1948 y los movimientos comunistas del siglo XX: ellos no terminaron con la caída del Muro de Berlín, sino que revivieron para amenazar la estabilidad de países como Francia, España y Chile. Ese complot, donde se destaca la labor de “jóvenes bien entrenados”, mezclados con los manifestantes pacíficos, para ejecutar actos vandálicos, hace evidente el carácter puramente político de los movimientos de protesta, “promovidos por los enemigos de la democracia”. En ese complot se ve la mano de Maduro, “el peor enemigo de la democracia colombiana”, pero también la de Petro, que está cumpliendo “su nefasta promesa” de “mantener permanentes revueltas en las calles” (2021, p. 2A).

En sentido semejante, Saúl Hernández Bolívar (2021, 4A) destacaba la narrativa criminal del paro, que según él “juega un importante papel en la guerra para derrocar al presidente Duque”, oculta bajo el pretexto de la lucha contra la reforma tributaria. Por su parte, Mario González (2021, 2a) destacaba el “creciente carácter terrorista que hoy prevalece en la tormenta que padecemos”, en la que no se puede ignorar “su minuciosa planeación, su concertada ejecución y su masiva financiación”; pero, además, sostuvo: “Los convocantes del Paro han perdido el control de la situación, si es que en algún momento la tuvieron, que ha pasado a manos del ELN, la Nueva Marquetalia y otras organizaciones criminales unidas por el narcotráfico y sus vínculos con el sátrapa Maduro”, y atizadas por Petro. Para Diego Arango Osorio, las protestas se prestaban al caos y la violencia, porque estaban infiltradas, lamentablemente, por movimientos políticos opositores al gobierno, algunos de cuyos principales promotores provienen de grupos guerrilleros urbanos, tales como “antiguos militantes armados del M-19” (2021, p. 4a).

Por su parte, José Félix Lafaurie empezó por negar el carácter espontáneo de los bloqueos y ataques a los peajes en las vías intermunicipales: se trata de acciones terroristas diseñadas en un ataque combinado para acorralar a Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Neiva, Tunja y otras capitales; es “la guerra del narcoterrorismo de izquierda, concebida en el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla, apoyada por Maduro desde afuera y Petro desde adentro”, que responde al “modelo de la revolución molecular disipada” (2021, p. 2A).

El término “revolución molecular disipada”, popularizado por el expresidente Uribe para reeditar la polarización en contra del castrochavismo, fue planteada por Alexis López, un entomólogo chileno, quien de acuerdo con columna editorial de *El Espectador* (11 de mayo de 2021, p. 18) sostiene que las movilizaciones recientes en Ecuador, Chile y Colombia obedecen a un plan orquestado por la izquierda para desestabilizar los gobiernos democráticos del hemisferio. Según esa teoría conspirativa<sup>1</sup>, desde esos pequeños escenarios puntuales de protesta, anónimos e inmediatos, de “baja intensidad”, la población inconforme puede ir generando cambios que servirían de punto de partida para deconstruir las estructuras dominantes (*El Nuevo Siglo*, 2021, 5A).

Para el excoronel John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales Retirados de las Fuerzas Militares (ACORE), la protesta social debería verse desde la perspectiva de la Guerra Fría, para ubicar a Colombia como un peón estratégico y aliado histórico de los Estados Unidos en la lucha de intereses extracontinentales y regionales, como

---

1 Al parecer, este concepto se basaría en la obra del filósofo y psicoanalista francés Félix Guattari (1930-1992), *La Revolución molecular* (París, 1977), considerada hoy como un sistema universal de las luchas emancipatorias y los movimientos sociales como moléculas que desafían al poder. Estas ideas, expuestas de manera tergiversada por el entomólogo chileno Alexis López ante algunos sectores vinculados a las fuerzas armadas, han servido de pretexto al expresidente Uribe y algunos de sus seguidores para deslegitimar la movilización social adversa al sistema tanto en Chile como en Colombia.

los de China y Rusia. Por eso sostiene que estas potencias pretenden desestabilizar a nuestro país bajo la fachada de la lucha entre izquierda y derecha, usando el narcotráfico como instrumento y a Venezuela como plataforma. En ese sentido, denuncia la presencia de “soldados rusos” en la frontera colombovenezolana, el uso de aviones chinos de combate por las fuerzas armadas venezolanas y los ciberataques desde Rusia. Este esfuerzo ha transformado la violencia rural en violencia en las calles, que evidencia “un ataque armado, terrorista y vandálico”, promovido por las FARC y el ELN, con el apoyo de Venezuela y del narcotráfico. Además, reforzado por una exitosa estrategia comunicacional, que ha logrado crear una opinión adversa al gobierno y a la Policía (Marulanda, 2021, pp. 1.16).

En sentido similar, Andrés Pastrana atribuye la autoría del andamiaje criminal contra Colombia a la narcodictadura de Maduro, como lo mostraban sus amenazas en el foro de San Pablo (2019) y las afirmaciones de Diosdado Cabello sobre la próxima llegada de las brisas de la revolución bolivariana a Colombia (Lozano, 2021 p, 1.8). En cambio, el exfiscal Néstor Humberto Martínez (2021) hacía recaer la responsabilidad en las instigaciones de Petro, quien había convocado la marcha más grande de la historia de Colombia y cuyos partidarios habían contribuido a la financiación de la organización de la llamada Primera Línea, diseñada para defender a los protestantes frente al ESMAD.

Y, en su defensa frente al Congreso, el ministro Diego Molano pasó de defender la actuación de la fuerza pública a la lectura complotista de la protesta social, cuya criminalización de los bloqueos lo llevó a asociar a los vándalos con grupos subversivos. Anunció así la captura de personas vinculadas a redes urbanas del ELN y disidencias de las FARC, con apoyo de los dineros del narcotráfico y movilizados por noticias falsas de redes de México, Venezuela, Bangladesh y Rusia. Según el ministro, se trataba de “un esfuerzo sistemático, premeditado, financiado” para afectar la estabilidad y atacar a la justicia, como las unidades de reac-



ción inmediata de la Fiscalía (*El Tiempo*, 2021b, pp. 1.2). En concreto, señaló la participación de grupos como el JM-19<sup>2</sup> y el Movimiento Bolivariano, organizados por el ELN y las disidencias de las FARC, coordinados con grupos locales de vándalos (*El Tiempo*, 2021a, p. 6).

Sin embargo, otros medios y funcionarios no creían que hubiera suficiente evidencia para sostener la existencia de un proyecto planificado juntamente por las distintas disidencias de las FARC y el ELN, cuya alianza parecía poco verosímil, aunque no se descartaron acciones marginales, planeadas por células urbanas, y acciones espontáneas de simpatizantes de esos grupos, junto con acciones oportunistas de grupos delincuenciales (*El Espectador*, 2021d, p.5 y 2021e, p. 2).

## **La resistencia: de la movilización social a la política institucionalizada**

Esta mirada homogeneizante y simplista del enfoque complotista contrasta con la compleja realidad de la movilización social, en la que la escasa representatividad del Comité Nacional de Paro se enfrentaba a la existencia de múltiples movimientos locales espontáneos, sin expresión política, en busca de cierta institucionalización por medio de comités de resistencia y organizaciones barriales. Por eso, Gómez Buendía señala la paradoja de una gran fortaleza de la movilización contrastada con la gran debilidad de los movimientos sociales, que muestran su incapacidad para canalizar ese descontento generalizado; esto se evidencia en la falta de representatividad del Comité Nacional de Paro, que intentaba recoger motivaciones distintas, no siempre coherentes entre sí (2021a, b, c y d).

Por tanto, concluye Gómez Buendía, el fracaso del Paro Nacional, después de la llamarada de sus comienzos, evidenció la debilidad y

---

2 Juventudes del M-19.

fragmentación de las organizaciones populares en Colombia, que impidieron que existiera un reclamo común entre los manifestantes que pudiera ser representado por el Comité Central del Paro, y sus dirigentes no tuvieron más remedio que reducir los puntos centrales de su gaseosa agenda a proyectos de ley para ser tramitados en el Congreso, para lo cual no era necesario un paro de dos meses. El tema grueso, según este autor, seguía siendo el divorcio entre los movimientos sociales y el sistema político: “mientras ellos no se organicen y utilicen la vía electoral, no habrá reformas de veras en Colombia”.

En sentido similar se referían Jorge Iván Cuervo y Nadia Pérez, analistas de la Universidad Externado de Colombia, a la desconexión casi total del Paro con el país político, pues sus protestas mostraron una agudización de “la ruptura entre sociedad política y sociedad civil”. Para ellos, era claro que el paro no estaba enmarcado en un movimiento político particular: aunque algunos grupos de izquierda intentaron tomarse su vocería, no había una verdadera representación política de un sector que pudiera apropiarse de la movilización social. Y, para Pérez, el desdibujamiento de los partidos, sobre todo los tradicionales, por omisión o pérdida de importancia, afecta incluso a las organizaciones sindicales que tradicionalmente han liderado esos paros y que, ahora, solo ocasionalmente se destacan con algunos pronunciamientos. Incluso, esto afecta a la izquierda, aunque algunos senadores del Polo, como Wilson Arias y Alexander López, denunciaron los excesos policiales y muchos se quejaron de la ausencia del Congreso como institución (Lombo, 2021, p. 5).

Por eso, concluye Gómez Buendía, esta desconexión con el mundo político y la debilidad interna de los movimientos sociales termina por favorecer la estrategia del gobierno de turno: concesiones puntuales para los grupos relativamente organizados y fórmulas genéricas sobre asuntos que no quiere cumplir (2021d, p. 43).

## El manejo político del Paro Nacional

En esa clase de manejo se inscriben las políticas del gobierno Duque, quien combinaba el reconocimiento formal de la legitimidad de la protesta con su deslegitimación concreta por el vandalismo de grupos radicales señalados de infiltración de grupos armados ilegales y de nexos con el narcotráfico, argumento que sirvió de justificación para la militarización de las ciudades donde se presentaban desmanes. Obviamente, no se podía descartar algún grado de infiltración marginal de células urbanas de milicianos y simpatizantes de las disidencias y del ELN en algunos hechos violentos, pero su papel estaba lejos de ser protagónico en las protestas.

Al tiempo, el Gobierno otorgaba concesiones puntuales para el beneficio de los jóvenes, como la oferta de matrícula cero, prórroga de pagos y auxilios del ICETEX, apoyos del SENA, ley para el empleo juvenil y apoyo a las elecciones de los Consejos Municipales de Juventud, junto con negociaciones puntuales con algunos sectores como el gremio de los camioneros, que permitió aliviar la situación de los bloqueos entre las poblaciones (*El Tiempo*, 2021b, p. 1.11; *El Espectador*, 2021c, 8-9). Y terminó aceptando, después de algunas reticencias iniciales, la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), cuya llegada fue precedida por el anuncio de reformas modernizantes de la Policía. Obviamente, el retiro de la reforma tributaria y el hundimiento de la propuesta de la reforma de la salud en el Congreso, y el aceleramiento de la vacunación del personal docente también contribuyeron a restarle apoyo social a las protestas.

Por otra parte, en el campo político la recomposición del gabinete ministerial —con mayor participación de otros partidos de la coalición del gobierno como Cambio Radical, el Partido de la U y el conservatismo—, permitió sortear la moción de censura contra el ministro Molano y consolidar una sólida mayoría a favor de los proyectos del Gobierno. A esa

coalición se sumaron no pocos congresistas liberales que desconocieron la autoridad de César Gaviria, su jefe nominal, para terminar aprobando los proyectos en los cuales el Gobierno estaba realmente interesado. A esta consolidación de la coalición gobiernista contribuyó también el cierre de las fisuras del Centro Democrático con el gobierno Duque, que se habían expresado en la petición de Fernando Londoño de que el presidente presentara su renuncia: el presidente Duque tenía que decidir entre hacer cumplir la ley frente a los bloqueos o presentar su renuncia como un favor al país (*El Nuevo Siglo*, 2021 b, p. 14A).

En la misma línea del llamado a ejercer la autoridad y hacer cumplir la ley se movían tanto Vargas Lleras como el propio Uribe: el primero acusaba a algunos alcaldes y gobernadores por resistirse a la intervención del Ejército en el control de las protestas, y denunciaba al alcalde de Zipaquirá por incitar a la protesta (2021a, pp. 1.18), mientras el segundo criticaba al Comité Nacional de Paro como promotor de los bloqueos y al gobierno Duque por falta de autoridad, al tiempo que defendía el despliegue total de la fuerza pública donde se presentaran bloqueos y actos violentos, y se mostró opuesto a toda negociación: “mientras más se negocie con promotores de violencia, más violencia habrá” (Uribe, 2021, p. 1.4).

Al lado de este fortalecimiento de la coalición gobernante, el gobierno de Duque intentó reeditar la estrategia de la “conversación nacional” con todos los grupos de la sociedad, adoptada para manejar el paro de 2019, que buscaba diluir la discusión de los movimientos sociales en el conjunto de la sociedad civil organizada, en la cual, obviamente, quedaban condenados a ser una minoría. Pero era, precisamente, la lectura de esta estrategia como una forma de “hacer conejo”, una de las motivaciones del Paro Nacional, pues iba en contravía de la petición de los dirigentes gremiales de una mesa bipartita de discusión entre los líderes y el Gobierno.

Por eso, después de muchas dilaciones y ante la presión de la opinión pública nacional e internacional, el Gobierno aceptó sentarse a negociar con los promotores del Paro hasta llegar, después de largas conversaciones, a un borrador de preacuerdo sobre las garantías para la protesta, como paso previo a la negociación del pliego de emergencia presentado por los negociadores. Sin embargo, el endurecimiento de las posiciones del Gobierno se hizo evidente en la exigencia, como condición inamovible, de la condena de los bloqueos, a sabiendas de que estos no dependían del Comité Nacional de Paro. Por su parte, dicho Comité insistía en la desmilitarización de las ciudades, la autonomía de los gobernantes locales y la no declaración de conmoción interior.

Para David Gleiser, experto en negociación de la Universidad del Rosario, este diálogo de sordos evidenciaba los problemas de una concepción de suma cero, que leía las negociaciones desde la percepción amigo/enemigo para pretender el desgaste del contrincante, exagerando su poder real de negociación y menospreciando el del adversario, al exigir al contrincante condiciones imposibles de cumplir sin negar su propia identidad (González, J, 2021, 2-3).

## **La “crónica de una muerte anunciada”**

El resultado lógico del endurecimiento de las posiciones de lado y lado fue un callejón sin salida que condujo al Comité Nacional de Paro a retirarse de la mesa de negociaciones y decidir llevar sus peticiones al Congreso como proyectos de ley. Obviamente, esto suponía el reconocimiento de los mecanismos tradicionales de representación política que los promotores del Paro se habían negado a reconocer desde el inicio de la protesta.

Sin embargo, el mantenimiento de los bloqueos y las protestas en muchos lugares hacía evidente la profundización de la ruptura entre el país nacional y el país político: la crisis de representación política de lo

social combinaba el rechazo de buena parte de la población integrada a la vida nacional al funcionamiento concreto de la institucionalidad existente, con la visibilización de amplia población solo marginalmente relacionada con la institucionalidad y articulada de manera subordinada al conjunto de la vida nacional —economía informal, legislación laboral, bienestar social, etc.—. La existencia de esta especie de “apartheid institucional”, en términos de García y Espinosa (2013), que ubica a buena parte de la población al margen de la normatividad, se combina con la protesta de sectores más integrados a la vida nacional, pero que también rechazan la manera concreta como funcionan las instituciones realmente existentes.

Esta complejidad de posiciones explica tanto el rechazo generalizado de los canales institucionales para la expresión del descontento como el desconocimiento por parte del Comité Nacional de Paro de muchas de las organizaciones movilizadas: Guardia Indígena del Cauca, algunos grupos estudiantiles y las organizaciones barriales espontáneas, entre otras. Esto indicaría, para algunos, el desconocimiento del cambio del carácter y de los protagonistas de la movilización social, cuya ruptura con el estilo sindical y de la izquierda tradicional hacía difícil enmarcar la protesta en las organizaciones que solían servir de canal institucional.

Y, obviamente, la incompreensión gubernamental de la resistencia de la población a mecanismos habituales de representación y la habitual desconfianza de sectores de derecha frente a la participación política y la movilización social, como lo hacían evidente los reparos de la vicepresidenta al acuerdo de La Habana: según ella, se corría el riesgo de pasar del conflicto armado, a poner al país “en modo protesta y modo paro”, que nos está perjudicando a todos, como muestra lo que está sucediendo ahora (Ramírez, 2021).

## ¿“Repúblicas independientes” en la periferia de las ciudades?

Esta incompreensión de la situación de *apartheid* institucional por parte de la población y la desconfianza del “participacionismo” de los acuerdos de La Habana, por otra, se manifestaron en la descalificación de Vargas Lleras del acuerdo que habían logrado los viceministros Juan Camilo Restrepo y Juan Pablo Díaz con las organizaciones del Paro en Buenaventura, para establecer un corredor humanitario para el transporte de elementos vitales. Vargas Lleras calificó a estos funcionarios como “descriteriados” (2021c, pp. 1.16; *El Tiempo*, 2021b, pp. 1,3), mientras el expresidente Uribe caracterizaba el acuerdo como una “sustitución de la autoridad legítima”. Por esto, el presidente Duque se vio obligado a aclararle al ministro del Interior, Daniel Palacios, que no había dado ninguna autorización para sustituir al Estado ni usurpar las funciones de control de la Policía y la aduana. Por su parte, el consejero presidencial para la Estabilización y la Consolidación, Emilio Archila, puntualizó que la posición del Gobierno era exigir el desbloqueo total y no solo lograr corredores humanitarios (*El Nuevo Siglo*, 2021c, p. 8A).

En sentido similar, el columnista Nicolás Gómez comparaba el acuerdo de los viceministros con las repúblicas independientes denunciadas por Álvaro Gómez en los años sesenta, pues significaban una entrega de la soberanía nacional y la institucionalidad estatal a “los señores del paro” (2021, p. 4A). Y, en su interpretación complotista habitual, Mario González veía el reconocimiento político de la llamada Primera Línea como el primer paso del establecimiento de guerrillas urbanas que pretenden el derrumbamiento de las instituciones democráticas por medio de actos vandálicos, financiadas por los carteles del narcotráfico, el ELN, las FARC, sectores sindicales y étnicos, el foro de Sao Paulo, el grupo de Puebla y el gobierno de Maduro. En ese plan, la Primera Línea, prohibida por el senador Bolívar, del Partido Colombia Humana, instalaría

campamentos urbanos que desplazarían a los movilizados legítimos en sus reclamos al Estado (2021b, p. 2A).

En sentido similar, la revista *Semana* leía esta organización social desde la perspectiva de “la revolución molecular dispersa” de Uribe, inspirada en el caso de Chile: en contraste con su autopresentación como “un grupo espontáneo y pacífico”, se trataría de “una organización con rasgos criminales”, financiada por dineros de la Segunda Marquetalia y el Frente Urbano Nacional del ELN, apoyada posiblemente por Juventudes M-19. Según el articulista, esa caracterización se basaba en un informe reservado de inteligencia, titulado “Carácter criminal del esquema organizativo Primera Línea”, que recogía el seguimiento milimétrico de transacciones millonarias de esos grupos financiadores, junto con grabaciones de conversaciones entre sus líderes de diferentes regiones, la preparación de alojamiento para los manifestantes de las regiones que llegarían a Bogotá, las cartillas de adoctrinamiento de menores de edad, y de preparación de escudos y elementos explosivos. Todo esto demostraría, según el informe de inteligencia citado por *Semana*, la existencia de movimientos de la Primera Línea en 14 departamentos, que estarían buscando una coordinación nacional (2044, pp. 28-31).

En contravía de estas miradas complotistas y apocalípticas, algunos analistas llamaron la atención sobre la complejidad y diversidad de los grupos que se denominan Primera Línea, inspirados en la respuesta de los manifestantes de Hong Kong y Chile a la represión policial, pero que no constituían un grupo organizado centralmente por obedecer a dinámicas barriales diferentes (*El Espectador*, 2021f, p. 2). De ahí la dificultad de estos grupos para negociar con las administraciones estatales por falta de un liderazgo común, pero también la necesidad de reconocer la importancia de los logros de los diálogos de los comités unificados de los barrios de Cali con el alcalde, Jorge Iván Ospina, pues estos, para el fin de los bloqueos, podían ser el inicio de una mayor institucionalización de la protesta social y un avance en la democratización de la políti-



ca local “desde abajo”. En ese sentido, estos comités de resistencia y las organizaciones de la llamada Primera Línea, con sus pretensiones de ser reconocidos como interlocutores políticos en diálogo con las autoridades locales, representan, a mi modo de ver, ciertos atisbos de nuevas ciudadanías en construcción, como una especie de protociudadanías, que podrían ser el comienzo de una sana politización del manejo de las protestas para ir superando, gradualmente, la incapacidad política de representación de lo social.

Estas medidas de diálogo fueron defendidas por el alcalde Ospina<sup>3</sup> en una entrevista con algunos analistas sociales: su decisión de otorgar vocería y representación a los resistentes obedecía a su convencimiento de la necesidad de una evolución política que creara instituciones mucho más atentas a la identificación de la problemática social de nuestra juventud. Según él, sería un despropósito que la bomba atómica social que hemos tenido no trajera consigo un diseño institucional más conectado con la población, que profundizara la democracia, la participación y la construcción conjunta del bienestar.

Pero estas medidas de Ospina suscitaron el rechazo de algunos sectores. Por ejemplo, según el senador Gabriel Velasco, del Centro Democrático, el Decreto Distrital 0304 del 31 de mayo legitimaba las vías de hecho y los bloqueos que impedían el derecho a la movilidad (*El País*, 2021). El decreto fue demandado, lo que llevó al Juzgado 16 Administrativo de Cali a suspenderlo provisionalmente. Esta suspensión fue dejada luego sin efectos por el Tribunal Contencioso Administrativo de Cali, que falló una tutela para amparar el derecho de la Unión de Resistencia Cali (UCR) a la protesta. Pero estos no fueron los únicos problemas jurídicos del alcalde: el fiscal 49 de la Administración Pública lo citó a interro-

---

3 Intervención en su encuentro con un grupo de politólogos el miércoles 23 de junio de 2021, registrado por Hernando Corral, quien gentilmente ha permitido el acceso a esta conversación.

gatorio, por acusaciones de no haber tomado medidas para evitar los muertos, heridos y destrozos en las movilizaciones. Además de este supuesto prevaricato por omisión, fue citado también por la Fiscalía 94 de Derechos Humanos para que explicara su actuación como servidor público y primera autoridad local de policía en esos mismos hechos (*El Tiempo*, 2021, pp. f 1.3 y g 1.3).

Es importante señalar, adicionalmente, el desarrollo generado dentro de las organizaciones barriales: mientras el secretario de Paz y Cultura Ciudadana de Cali, Denis Rentería, reiteraba la continuación de las mesas de negociación con la URC, los integrantes de las mesas señalaban que el alcalde quería reivindicar los acuerdos logrados como propios, cuando en realidad estaban inspirados en el trabajo del grupo, y destacaban como triunfos la participación directa en política para la construcción conjunta de políticas públicas, la veeduría ciudadana sobre el manejo de los dineros públicos, la intervención en el plan de desarrollo y la elaboración del plan de emergencia. Por otra parte, reivindicaban avances graduales en el proceso gracias a la Asamblea Popular, al tiempo que reconocían al Congreso como el ámbito donde se logran los cambios importantes. De ahí su debate sobre la participación electoral, querida por algunos, con candidatos propios o en alianza con otros grupos; la aclaración de no estar apoyando la avanzada de las primeras líneas hacia Bogotá; y el rechazo a las ofertas de financiación por parte de narcotraficantes, sicarios y grupos guerrilleros, pues estaban en capacidad de demostrar que contaban con financiación propia, gracias a donaciones de los mismos caleños y de colombianos residentes en el exterior (Giraldo, 2021, p. 5).

Sin embargo, a pesar de los logros de esta actitud dialogante, la desconfianza de las autoridades policiales frente a estas organizaciones siguió siendo evidente en las medidas de prevención de los posibles actos violentos en las marchas del 20 de julio: el comandante de la Policía de Bogotá, general Eliécer Camacho, afirmó tener conocimiento

de que varias organizaciones sociales de diferentes regiones planeaban desplazarse a la capital para apoyar las marchas, y para manejar la situación anunció la creación de puestos de control para la entrada de los visitantes, junto con la incautación de elementos como escudos y cascos, que serían utilizados para la confrontación con el ESMAD. Según él, labores de inteligencia permitían establecer que integrantes de la Primera Línea de Bogotá no solo estarían convocando las manifestaciones, sino organizando prácticas vandálicas para afectar a los miembros de la fuerza pública con caucheras, canicas y bombas molotov, al tiempo que recolectaban fondos para patrocinar las marchas. Estos planteamientos apocalípticos contrastaban con el mensaje de la denominada Primera Línea Jurídica, que rechazaba explícitamente todo tipo de agresiones y actos vandálicos (*El Tiempo*, 2021d, pp. 1.12),

A pesar de esas aclaraciones, algunas autoridades insistían en la existencia de otra primera línea “oculta”, infiltrada y financiada por la guerrilla y las disidencias, que buscaba desatar el caos y boicotear tanto la instalación del nuevo período legislativo como el desfile militar del 20 de julio. En apoyo de esta interpretación, citaban un mensaje interceptado a las disidencias de las FARC en que pedían pasar a la ofensiva contra la asistencia militar. Según el ministro de Defensa, se preparaba una movilización masiva con intenciones de violencia, que respondía, de acuerdo con informes de inteligencia, a intenciones del ELN y las disidencias de las FARC: los redactores de *El Tiempo* que tuvieron acceso a los informes, señalaban concretamente las acciones puntuales previstas por el frente urbano del ELN en varias ciudades (2021e, pp. 1.4).

Según Fernanda Torres Tovar y Sebastián Cote Lozano, periodistas de *El Espectador*, la Primera Línea Jurídica, compuesta por alrededor de 4000 abogados de diferentes sitios, ofrecía sus servicios, *ad honorem*, para la defensa de los jóvenes capturados, imputados o trasladados para “su protección”, a los que se estaría señalando, de manera indiscriminada, de terrorismo. Estas ofertas, complementadas por el trabajo de profe-

sionales de otras áreas como médicos, psicólogos y comunicadores sociales, buscaban responder a la criminalización de que estaban siendo objeto algunos jóvenes del Eje Cafetero y el Valle del Cauca por parte de la Fiscalía (2021, pp. 2-3).

Obviamente, los pronósticos apocalípticos de algunos analistas y funcionarios estuvieron muy lejos de cumplirse en la realidad, ya que la gran mayoría de las movilizaciones del 20 de julio transcurrieron de forma pacífica, con algunos actos aislados de vandalismo, pero sin la presencia anunciada de muchos militantes de otras ciudades en apoyo de las marchas de Bogotá, que fueron menos concurridas de lo que se esperaba. Esto fue atribuido por los ministros del Interior y de Defensa, junto con el director de la Policía, a que las medidas de prevención y control habían dado frutos (*El Nuevo Siglo*, 2021, p. 6A).

## **A manera de conclusión: ¿debe y puede la política representar lo social?**

El intento de descripción densa de la coyuntura del Paro Nacional de 2021, iluminada por las reflexiones de analistas como Gómez Buendía, y enmarcada en una mirada de más larga duración de nuestra vida política, se acerca a las reflexiones que autores como Claude Lefort (1992) y Norbert Lechner (1992) han planteado, desde años atrás, sobre la relación compleja entre democracia y representación, escritas en el contexto de la transición de la dictadura a la democracia en el Cono Sur.<sup>4</sup> Así, puede ser útil destacar hoy la importancia que Lefort otorgaba entonces a modos transitorios de representación, como los comités de huelga o las coordinaciones ocasionales de grupos de interés, así asu-

---

4 Esas reflexiones se dieron en el marco de un seminario conjunto, realizado en Santiago de Chile, organizado por la École Pratique des Hautes Etudes en Sciences Sociales y la comisión de trabajo del Consejo Latinoamericano en Ciencias Sociales sobre teoría del Estado y de la política, en 1992.

man formas extrañas y un poco salvajes. Esta nota podría aplicarse hoy a los desmanes y actos vandálicos desarrollados con ocasión del Paro.

También pueden ser útiles en el momento actual de Colombia, el reconocimiento que Lefort hacía entonces (1992) del debilitamiento de la representación institucionalizada de los movimientos sociales en el mundo entero, al lado de su reiterada insistencia en que, para que este tipo de representación transitoria sea efectiva, debe tender a establecer un espacio público que logre una modificación mutua de los puntos de vista, gracias a la expresión y circulación de las diversas opiniones:

Todo lo que hay de fecundo en las iniciativas colectivas, en las iniciativas comunitarias, en los movimientos a veces salvajes<sup>5</sup> que reaniman la exigencia de una participación activa en la vida pública, todo esto adquiere sentido sólo si se articula con la representación política. Así tenemos que conciliar la idea de la fragmentación de las reivindicaciones y de las formas múltiples y salvajes de representación, con la idea de formación de una verdadera escena política. (Lefort, 1992, p.143).

Por eso, concluye Lefort, que la transición entre dictadura y democracia, que era el contexto en que se movían sus reflexiones de entonces, debería estar acompañada por un programa de limitación de los efectos de la pobreza, pero, sobre todo, “por un verdadero combate contra el fenómeno de la exclusión, es más, por una doctrina de inserción del conjunto de los ciudadanos en la comunidad nacional” (1992, p. 144). En el momento actual de Colombia, autores como Daniel Pécaut (2021) han señalado la carencia de un discurso que incluya a la población colombiana en la comunidad nacional y le ofrezca una oportunidad de futuro, lo que ha sido aplicado a los problemas de las poblaciones

---

5 Es interesante destacar que Lefort reconoce que algunas iniciativas de protesta pueden llegar a ser “formas salvajes de representación”, pero este rasgo no las despoja de cierta fecundidad, mientras desemboquen en la escena política.

campesinas en la periferia para la explicación de la violencia reciente, pero también, de acuerdo con Elias y Scotson (2016), aplicaría a las tensiones que la migración urbana ha representado a los integrados de los barrios populares de ciudades grandes y medianas como Cali.

La importancia de la inclusión es igualmente resaltada por Lechner desde 1992, cuando se preguntaba por la posibilidad de formas institucionalizadas de organización, como sindicatos y partidos políticos, para la representación simbólica de la complejidad de lo social, que es una problemática que continúa vigente hoy, agravada por la presencia de movilizaciones sociales transitorias y poco institucionalizadas como las que vivió el país en 2021.

Pero, además, Lechner destaca el carácter de lo social como una construcción acotada por factores materiales que limitan nuestras imágenes de sociedad y orden. Y señala cómo ellas se reflejan en nuestros temores y deseos, constituyendo una especie de materia prima de nuestras ideologías y formas institucionales de representación, como partidos y sindicatos. De ahí la importancia de considerar nuestras imágenes de Estado y ciudadanía, ya que es obvio, para Lechner, que los Estados latinoamericanos distan de ser lo que Marx denomina la síntesis de la sociedad civil, dadas las inmensas desigualdades sociales, económicas y étnicas que impiden que la forma Estado exprese la vida social; son débiles los mecanismos de integración cultural y las redes de integración tanto por la sociedad (el mercado) como por el propio Estado (la burocracia). Por eso, sostiene Lechner, la idea de Estado opera en contraste con otros Estados nacionales, pero no como “expresión de una comunidad política sin exclusiones” (1992, p. 136).

Esta idea de la necesidad de construir un Estado que represente la comunidad imaginada de compatriotas, sin exclusiones de ninguna especie, es reforzada por Claude Lefort, cuando insiste en que la participación no se reduce a la dinámica electoral, ni a los mecanismos de democra-

cia directa, sino que tiene que ver con el sentimiento de los ciudadanos de estar involucrados en el debate de los asuntos que les conciernen, sin esperar pasivamente medidas favorables que los favorecen, pensadas por algunas élites de tecnócratas o algunos líderes populistas. Así, compara la utopía del ágora de las ciudades griegas —donde las clases altas seguían siendo las protagonistas de la vida política, pero con la capacidad de las clases bajas para sentirse implicadas en la vida pública—, con las sociedades del Antiguo Régimen, basadas en el secreto de la decisión del gobernante y de su grupo, y con la situación de América Latina, donde la fractura existente entre élite y masa circunscribe el juego político a la competencia entre las minorías rectoras.

Acota igualmente Lefort que el mayor valor de la representación política, por débil que sea, es impedir que el Estado se cierre sobre sí mismo al hacer aparecer los conflictos del conjunto de la sociedad en la escena pública. Esto depende, para él, de que no haya ruptura entre partidos, élites y masas. Por eso, afirma, es necesario encontrar un nuevo lenguaje político, que sea democrático —claramente distinguible de gobiernos oligárquicos o autoritarios—, pero que reconozca, en forma realista, los problemas que la democracia, como forma simbólica de la sociedad, no podrá resolver porque no puede traducirse a lo empírico como una solución a problemas económicos y técnicos (1992, pp. 139-142).

De ahí la importancia que reviste la movilización social reciente para el reclamo de las comunidades barriales en cuanto a ser tenidas en cuenta, y que anuncia la llegada a la escena política de importantes sectores de la población que habían estado marginal o subordinadamente sometidos a la institucionalidad social y política del país, y exigen su integración plena a la vida económica y social de la nación. Más allá de los reclamos de reivindicaciones puntuales de carácter económico, la reciente ola de movilizaciones visibilizó la existencia de grupos poco articulados a la dinámica de las instituciones, pero que no están excluidos del todo del sistema político. Es precisamente este grado de inclusión,

así sea mínimo, lo que permite su participación en la protesta, adoptando mecanismos según sus posibilidades de acción y las oportunidades que les proporciona el contexto político.

Por eso, la coyuntura del Paro Nacional de los meses de abril, mayo y junio de 2021 ofrece una excelente oportunidad para el análisis de la crisis de representación política, cuando el rechazo casi general sobre la mediación de los partidos y grupos políticos institucionalizados y la desconfianza frente a las instituciones estatales, especialmente de las ramas ejecutiva y legislativa, coincidió con la irrupción en la escena política de grupos sociales, compuestos por jóvenes de barrios periféricos de las ciudades, que se negaron a reconocerse representados por los movimientos sociales institucionalizados y pretendían aplicar formas autónomas de diálogo con las autoridades estatales del orden local.

Esto implicaría, en contra de la tradicional contraposición entre los movimientos sociales y la política institucionalizada —que se expresa en la consideración de los protestantes como *outsiders* frente a los detentadores del poder (*insiders*)—, una constante interacción entre unos y otros, cuya complejidad es señalada por la variedad de ensayos recogidos por Jack Goldstone (2003), que evidencian las diferentes relaciones de los grupos movilizados con los poderes establecidos, según su grado y estilo de integración social. A su vez, Charles Tilly (2003) subraya el hecho, bastante obvio, de que los grupos poderosos no acuden, generalmente, a la protesta, porque poseen otros medios para expresar sus reclamos; pero tampoco protestan los que están totalmente desprovistos de poder, porque carecen de instrumentos y recursos necesarios para que sus reclamos sean escuchados. Entre esos dos extremos se ubican los protestantes al reclamar por sus propias quejas o por aquellos sectores que dicen representar, cuya movilización supone que existe alguna posibilidad de cambio positivo de su situación.



Por ello, es posible concluir que las movilizaciones sociales en torno al Paro Nacional de 2021 podrían constituirse en una ocasión para rescatar el significado político de esas organizaciones comunitarias, que serían mecanismos de cierta protociudadanía, que podrían irse articulando gradualmente con la institucionalidad del Estado, especialmente del nivel local y sublocal, por medio del diálogo con alcaldías locales, ediles locales y autoridades sublocales de otros municipios y otras organizaciones como las acciones comunales, asociaciones de vecinos y grupos similares. Pero este desafío implicaría la necesidad de superar las mutuas estigmatizaciones entre protestantes y autoridades locales, junto con algún grado de creatividad institucional, que, por ahora, es escasa, especialmente en el ámbito nacional de la política.

## Referencias

- Aponte, Andrés y González, Fernán (Eds.). (2021). *¿Por qué es tan difícil negociar con el ELN? Las consecuencias de un federalismo insurgente, 1964-2020*. Centro de Investigación y Educación Popular.
- Arango Osorio, Diego. (6 de mayo de 2021). Marcha y violencia. *El Nuevo Siglo*.
- Delgado, Paula. (10 de junio de 2021c). Hoy no hay ningún bloqueo en las vías. *El Espectador*. <https://www.elespectador.com/economia/hoy-no-hay-ningun-bloqueo-en-las-vias-mintransporte/>
- Duncan, Gustavo. (11 de mayo de 2021). El gran despilfarro. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/gustavo-duncan/el-gran-despilfarro-columna-de-gustavo-duncan-587755>
- El Espectador. (21 de abril de 2021a). Los jóvenes se sienten ignorados por los políticos. *El Espectador*. <https://www.elespectador.com/politica/los-jovenes-se-sienten-ignorados-por-los-politicos-article/>
- El Espectador. (6 de mayo de 2021b). Paro nacional: el fantasma de la insurgencia en las protestas. *El Espectador*. <https://www.elespectador.com/judicial/paro-nacional-el-fantasma-de-la-insurgencia-en-las-protestas-article/>

- El Espectador. (8 de mayo de 2021c). “Tenemos un presidente demócrata e inspirador”: ministro de Defensa Diego Molano. *El Espectador*. <https://www.elespectador.com/judicial/tenemos-un-presidente-democrata-e-inspirador-ministro-de-defensa-diego-molano-article/>
- El Espectador. (11 de mayo de 2021d). No nos crean tan moleculares. *El Espectador*. <https://www.elespectador.com/opinion/editorial/no-nos-crean-tan-moleculares/>
- El Espectador. (12 de mayo de 2021e). Cali: ¿están las disidencias detrás de los disturbios? *El Espectador*. <https://www.elespectador.com/tags/cali-en-paro-nacional/>
- El Nuevo Siglo. (29 de mayo de 2021). Duque desautorizó el acuerdo de Buenaventura. *El Nuevo Siglo*. <https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-28-2021-gobierno-desaprueba-acuerdo-de-buenaventura>
- El Nuevo Siglo. (2 de junio de 2021). Cali: críticas a decretos de acuerdo con manifestantes. *El Nuevo Siglo*.
- El Nuevo Siglo. (3 de junio de 2021). Salen chispas en uribismo por actuación de Duque frente a los bloqueos. *El Nuevo Siglo*.
- El Nuevo Siglo. (21 de julio de 2021). Funcionó el dispositivo de seguridad de las autoridades para el 20 de julio. *El Nuevo Siglo*.
- El País. (1 de junio de 2021). Críticas a Ospina por decretar diálogo sin levantar bloqueos en Cali. *El País*. <https://www.elpais.com.co/cali/criticas-a-ospina-por-decretar-dialogo-sin-levantar-bloqueos-en.html>
- El Tiempo. (19 de mayo de 2021a). La generación ‘sin futuro’ que quiere revertir ese destino. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/colombia/analisis-jovenes-los-protagonistas-de-las-protestas-sociales-en-colombia-589475>
- El Tiempo. (21 de mayo de 2021b). Frente a la moción de censura, ¿tranquilo, asustado o envalentonado? *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/diego-molano-habla-con-maria-isabel-rueda-sobre-mocion-de-censura-589979>
- El Tiempo. (29 de mayo de 2021c). Polémica por acuerdo con el comité del paro en Buenaventura. *El Tiempo*.

- El Tiempo. (03 de junio de 2021d). El malestar del uribismo radical con el presidente Duque. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/el-malestar-del-uribismo-radical-con-el-presidente-duque-593056>
- El Tiempo. (06 de junio de 2021e). Transporte de carga, el acuerdo que ya fue posible durante el paro. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/economia/sectores/estos-son-los-puntos-que-ya-acordo-el-gobierno-y-los-camioneros-594011>
- El Tiempo. (30 de junio de 2021f). ¿Qué hay detrás de la citación al alcalde de Cali por bloqueo y caos? *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/cali-por-que-citaron-a-la-fiscalia-al-alcalde-jorge-ivan-ospina-599721>
- El Tiempo. (01 de julio de 2021g). Alcalde de Cali declara ante la Fiscalía por su actuación en el paro. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/colombia/cali/cali-alcalde-ospina-rinde-declaracion-ante-fiscal-por-paro-600209>
- El Tiempo. (15 de julio de 2021h). Así avanza la primera línea hacia Bogotá. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/unidad-investigativa/20-de-julio-asi-avanza-la-primera-linea-hacia-bogota-603321>
- El Tiempo. (15 de julio de 2021i). En 11 municipios hay alerta por riesgo de hechos violentos. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/alertan-por-movilizaciones-violentas-20-julio-en-municipios-de-colombia-603324#:~:text=La%20alerta%20m%C3%A1s%20importante%20advierte,Bogot%C3%A1%20van%20a%20ser%20infiltrados.&text=La%20Fuerza%20P%C3%BAblica%20recorri%C3%B3%20esas,medidas%20que%20prevengan%20estos%20hechos.>
- El Tiempo. (16 de julio de 2021j). Así se prepara la ciudad para las protestas del 20 de julio. Se están entrenando para atacar a la policía. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/bogota/asi-se-prepara-la-ciudad-para-las-protestas-del-20-de-julio-603626>
- Elias, Norbert y Scotson, John L. (2016). *Establecidos y marginados. Una investigación sociológica sobre problemas comunitarios*. Fondo de Cultura Económica.
- García Villegas, Mauricio y Espinosa, José Rafael. (2013). *El derecho al Estado. Los efectos legales del apartheid institucional en Colombia*. Dejusticia.

- Giraldo Zuluaga, César. (18 de julio de 2021). Unión de Resistencias de Cali debate su participación política en 2022. *El Espectador*. <https://www.elespectador.com/colombia/cali/union-de-resistencias-de-cali-debate-su-participacion-politica-en-2022/>
- Goldstone, Jack A. (Ed.). (2003). *States, Parties and Social Movements*. Cambridge University Press.
- Gómez, Nicolás. (28 de mayo de 2021). ¿La República Independiente del Valle? *El Nuevo Siglo*. <https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-28-2021-la-republica-independiente-del-valle>
- Gómez Buendía, Hernando. (10 de mayo de 2021a). El presidente Duque decidió apoyar a Petro. *Razón Pública*. <https://razonpublica.com/presidente-duque-decidio-apoyar-petro/>
- Gómez Buendía, Hernando. (5 de junio de 2021b). Arreglo a la colombiana. *El Espectador*. <https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/hernando-gomez-buendia/arreglo-a-la-colombiana/>
- Gómez Buendía, Hernando. (20 de junio de 2021c). ¿Por qué fracasó el paro nacional? *El Espectador*. <https://www.elespectador.com/opinion/columnistas/hernando-gomez-buendia/por-que-fracaso-el-paro-nacional/>
- Gómez Buendía, Hernando. (21 de junio de 2021d). Fin y comienzo del paro nacional. *Razón Pública*. <https://razonpublica.com/fin-comienzo-del-paro-nacional>
- González, Fernán. (1997). Aproximación a la configuración política de Colombia. En Fernán González, *Para leer la Política. Ensayos de historia política colombiana*. CINEP.
- González, Fernán. (2016) ¿Gobernabilidades híbridas o gobernanza institucionalizada en Colombia? Elementos para pensar la paz territorial en un escenario de transición. *Controversia*, (206).
- González Penagos, Javier. (4 de junio de 2021). Los propios “bloqueos” que tienen coja la mesa para atender el paro. *El Espectador*. <https://www.elespectador.com/politica/los-propios-bloqueos-que-tienen-coja-la-mesa-para-atender-el-paro/>

- González, Mario. (7 de mayo de 2021a). El mandato ciudadano. *El Nuevo Siglo*. <https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-07-2021-el-mandato-ciudadano>
- González, Mario. (3 de julio de 2021b). Hora para la firmeza y unidad institucional. *El Nuevo Siglo*.
- Guerrero Bernal, Juan Carlos. (3 de mayo de 2021). ¿Revivió tal cual el Paro Nacional en medio de la pandemia? *Razón Pública*. <https://razonpublica.com/revivio-tal-paro-nacional-medio-la-pandemia/>
- Gutiérrez-Sanín, Francisco. (2007). *¿Lo que el viento se llevó? Los partidos y la democracia en Colombia, 1958-2002*. Grupo Editorial Norma.
- Hernández, Saúl. (13 de mayo de 2021). La narrativa del paro criminal. *El Nuevo Siglo*. <https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-13-2021-la-narrativa-del-paro-criminal>
- Lafaurie, José Félix. (9 de mayo de 2021). Guerra contra Colombia. *El Nuevo Siglo*. <https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-09-2021-guerra-contra-colombia>
- Lechner, Norbert. (1992). ¿La política debe o puede representar a lo social?. En Mario Dos Santos (Coord.), *¿Qué queda de la representación política?* Editorial Nueva Sociedad.
- Lefort, Claude. (1992). La representación no agota la democracia. En Mario Dos Santos (Coord.), *¿Qué queda de la representación política?* (pp. 139-145). Editorial Nueva Sociedad.
- Lombo, Juan Sebastián. (4 de mayo de 2021). Los actores políticos frente a las movilizaciones. *El Espectador*. <https://www.elespectador.com/politica/los-actores-politicos-frente-a-las-movilizaciones-article/>
- Lozano, Juan. (6 de junio de 2021). Pastrana, en primera línea. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/juan-lozano/pastrana-en-primera-linea-columna-de-juan-lozano-594121>
- Martínez, Carlos. (10 de diciembre de 2019). ¿Revolución Molecular disipada? *El Nuevo Siglo*. <https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/12-2019-revolucion-molecular-disipada>

- Martínez, Néstor Humberto. (12 de junio de 2021). Gustavo Petro nunca será presidente: la arremetida de Néstor Humberto Martínez. *Semana*, (2039).
- Marulanda, John. (3 de junio de 2021). Nos preocupa que los intereses de China y Rusia desestabilicen a Colombia. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/nos-preocupa-que-los-intereses-de-china-y-rusia-desestabilicen-a-colombia-593256>
- Miranda Ontaneda, Néstor. (1976). Clientelismo y dominio de clase. *Controversia*, (41-42).
- Plata, Juan Camilo; Ávila, Carlos Arturo y García, Miguel. (2021). *Colombia, un país en medio de la pandemia. Democracia e instituciones*. Universidad de los Andes.
- Ocampo, Gloria Isabel. (2014). *Poderes regionales, clientelismo y Estado. Etnografías del poder y la política en Córdoba, Colombia*. CINEP.
- Ocampo, Gloria Isabel. (2018) *¿Cuál Estado, para cuál ciudadanía? Paradojas y disyunciones de la modernización del Estado en Colombia*. CINEP.
- Ospina, María Clara. (11 de mayo de 2021). ¡Colombia bajo ataque! *El Nuevo Siglo*. <https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/05-11-2021-colombia-bajo-ataque>
- Pécaut, Daniel. (2021). La Colombie, une nation fragmentée. *Esprit*, (480), 119-129.
- Ramírez, Marta Lucía. (19 de mayo de 2021). El país ‘en modo paro’ amenaza la paz social. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/marta-lucia-ramirez/columna-de-marta-lucia-ramirez-sobre-el-paro-en-el-pais-589624>
- Rivera Mónica. (01 de julio de 2021). ¿Qué es la Primera Línea? *El Espectador*. <https://www.elespectador.com/bogota/que-es-la-primera-linea/>
- Semana. (17 de julio de 2021). La peligrosa ‘primera línea’. *Semana* (2044).
- Tilly, Charles. (2003). Afterword: Agenda for students of social movements. In Jack Goldstone (Ed.), *States, Parties and Social Movements* (pp. 246-256). Cambridge University Press.

- Torres Tovar, Fernanda y Cote Lozano, Sebastián. (6 de julio de 2021). Primera Línea: de defensores de la protesta a imputados por terrorismo. *El Espectador*. <https://www.elespectador.com/judicial/primera-linea-de-defensores-de-la-protستا-a-imputados-por-terrorismo/>
- Vargas Lleras, Germán. (15 de mayo de 2021a). De paros y bloqueos. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/de-paros-y-bloqueos-columna-de-german-vargas-lleras-588769>
- Vargas Lleras, Germán. (22 de mayo de 2021b). Anuncios y resultados. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/anuncios-y-resultados-columna-de-german-vargas-lleras-590389>
- Vargas Lleras, Germán. (05 de junio de 2021c). Simplemente cumplir la ley. *El Tiempo*. <https://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/german-vargas-lleras/simplemente-cumplir-la-ley-columna-de-german-vargas-lleras-593958>
- Vásquez, Teófilo; Vargas Andrés y Restrepo, Jorge. (2011). *Una vieja guerra en un nuevo contexto. Conflicto y territorio en el sur de Colombia*. Pontificia Universidad Javeriana.